



44ª Asamblea
San Nicolás, 22 de septiembre de 2006

Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información

Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información

En la Argentina hay libertad de prensa. Sin embargo, debe advertirse que la actividad periodística se desarrolla con dificultades, a raíz de factores políticos y económicos.

En las cimas del discurso oficial, el ejercicio de la crítica, que es consustancial a la existencia del periodismo, ha sido reiteradamente confundido con una práctica opositora. Lamentablemente se trata de un error de concepto. La crítica no sólo es uno de los nervios del quehacer periodístico, sino el mayor aporte que -en una sociedad abierta- nuestro sector puede ofrecer a la ciudadanía, al mejor desempeño del gobierno y al adecuado funcionamiento de las instituciones.

Controlar los actos del poder, ponerlos bajo la lupa del análisis, someterlos a las pruebas del ejercicio reflexivo, a la exigencia de los argumentos fundados, son deberes del periodismo bien entendido en el juego de un sistema democrático y republicano.

En esta concepción, que ADEPA suscribe, la crítica abierta y decente, sin miedos ni cortapisas, es un nutriente indispensable para el cuerpo de la República y un factor que oxigena el cerebro del poder.

La prensa del país habilita cada día innumerables canales de comunicación entre las personas, las organizaciones y entidades, los representantes políticos y los que gobiernan. Por ellos circula, jornada tras jornada, la savia de una democracia moderna y plural.

Es cierto que en ese flujo continuo de comunicación pueden deslizarse errores, inexactitudes e incluso acciones mal inspiradas. Pero si se la juzga por el resultado general, la prensa sale airosa y exhibe con responsabilidad y orgullo su condición de pieza clave en la ingeniería de nuestro sistema constitucional.

Si bien se mira, no hay auditoría más amplia, sistemática, sostenida y veloz sobre las más diversas cuestiones de interés público, que la que cotidianamente realiza el conjunto de los medios periodísticos en la extensa geografía del país. Por lo tanto, esta actividad debería ser un bienpreciado para los gobernantes, siempre acechados por el peligro de quedar encerrados en los círculos viciosos que suelen trazar los intereses de corto plazo y la actitud aquiescente de los que integran las capillas del poder.

La crítica bien hecha es movilizadora, estimula el debate, obliga a pensar, exige respuestas razonadas, invita a revisar posiciones y a corregir errores, genera una dinámica intelectual superadora y es socialmente productiva. Forma parte del conjunto de herramientas que permiten realizar con eficacia el control republicano de los actos del poder.

El carácter opositor que el gobierno suele atribuir a quienes ejercen la crítica periodística, es un error de encuadre, ya que si bien en determinadas circunstancias puede parecerse y aun coincidir con la que realizan fuerzas políticas de oposición, la diferencia decisiva radica en la finalidad que tienen una y otra. La oposición se manifiesta en función de estrategias orientadas a la conquista del poder. El periodismo, en tanto, sólo pretende evitar o prevenir los desbordes o desvíos a los que el poder tiende en cualquier tiempo y lugar. Su papel, al cabo, es el de un contrapeso importante en la mecánica institucional republicana, especialmente valorado y protegido por las normas de la Constitución y de los tratados internacionales incorporados a su texto.

Los gobiernos –nacional y provinciales- parecen no advertir estos matices y diferenciaciones, cerrándose en actitudes que perturban el normal funcionamiento de la prensa, afectan la información que tiene al ciudadano como destinatario y perjudican, por tanto, la calidad del debate público. Al bloquear canales de comunicación con el periodismo, se priva a la ciudadanía de material informativo o argumentativo al que debería acceder para formar criterios, definir opciones y tomar decisiones.

El presidente se dirige directamente al pueblo en un esquema que se caracteriza por su unidireccionalidad. Se desconoce la labor de una prensa preparada para preguntar y repreguntar, y por tanto, para exigir del mandatario respuestas precisas y fundamentadas sobre los temas y acciones que plantean dudas.

En el terreno económico

Las empresas periodísticas comprenden la necesidad de expandir la producción exportable y de alentar la sustitución de importaciones para promover el trabajo nacional, pero deben expresar las serias dificultades que la política cambiaria del gobierno –orientada a ganar competitividad mediante la sobrevaluación del dólar- provoca a diarios, periódicos y revistas.

Nuestro sector tiene una porción muy significativa de sus costos atada a monedas duras como el dólar y el euro, porque la mayor parte de sus equipos de producción, repuestos e insumos no se fabrican en el país. Por otra parte, sus productos –las publicaciones- se venden en pesos y en mercados todavía muy acotados por el real poder de compra de la ciudadanía. En consecuencia, las pequeñas pero constantes devaluaciones del peso dificultan la consolidación de las empresas.

Agobia a las empresas periodísticas en general, y en particular a las Pymes, la presión fiscal derivada de la aplicación del IVA al precio de tapa, y en algunos casos de empresas de menor envergadura, el IVA a la publicidad.

En este sentido, la falta de respuesta a las medidas de atenuación planteadas al Estado, conspira contra la salud de los medios y, por ende, contra los canales que efectivizan la libertad de prensa a través de la multiplicidad de empresas periodísticas y de la consiguiente circulación fluida y diversa de las informaciones.

En suma, los diversos aspectos analizados convergen hoy en un cuadro complejo para el periodismo gráfico argentino. El cuestionamiento –explícito o implícito- del papel que le cabe como eficaz factor de control republicano y como activador de las múltiples relaciones que tejen la trama social cotidiana, se une a la desconsideración económica por parte de un gobierno cuyas medidas generan, como efecto secundario, condiciones desfavorables para el desempeño de la empresa periodística. Pero además, el modelo de comunicación bloqueada que practica el

gobierno nacional comienza a ser reproducido por algunos mandatarios provinciales y diversos intendentes, tendencia que empeora una situación en la que no han faltado –en ámbitos municipales- acciones intimidatorias e, inclusive, alguna agresión física violenta.

Es deber de Adepa señalar estos problemas que afectan, en primer lugar, a periodistas y empresas periodísticas, pero que ponen en riesgo la calidad de nuestra democracia. Es cierto que desde el restablecimiento de las instituciones, en 1983, distintos gobiernos llevaron la natural tensión entre el poder y el periodismo a puntos altos de crispación y conflicto. Pero esos antecedentes no suavizan la preocupación que en estos días despiertan posiciones gubernamentales que exceden las circunstancias y parecen asumir la forma de una política hacia los medios de comunicación. En estas circunstancias, Adepa reafirma su voluntad de siempre de establecer un diálogo institucional.

De nuestra parte, también es necesario decir que los beneficios de la libertad que proclamamos nos obliga, en el plano concreto del ejercicio periodístico, a ser consecuentes con los principios que la informan y las responsabilidades que exige.